

mo Estado de Coahuila) conforme á las prevenciones de las leyes números 64, 75 y 28 de la legislatura de San Luis Potosí, con cuyo cobro, alegan los quejosos, se infrinje el art. 72 constitucional en su fraccion 9ª. Visto el oficio del C. administrador de rentas en que se reproduce por vía de informe en este juicio el que rindió en 3 de Julio próximo pasado, en el amparo semejante que promovieron los mismos interesados.

Visto el pedimento del C. promotor fiscal: los justificantes y alegato presentados por los quejosos; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que es un hecho que la ley núm. 35, expedida por la legislatura del Estado de San Luis Potosí, establece una restriccion onerosa al comercio de mantas procedentes de otros Estados, por desnivelar sus precios con el privilegio que concede á la fábrica de «Gundalupe», eximiéndola por cinco años del pago de impuestos que tienen las mantas que se introducen de fuera. Que para hacer esta consecion en los términos indicados, no tiene la referida legislatura facultad alguna, puesto que por la fraccion 9ª del art. 72 constitucional, está prohibida. Que por el mismo hecho se contraría por el Estado la prevencion de la ley general de 2 de Mayo de 1868. Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito de San Luis Potosí en 14 de Setiembre último, que declaró: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Enrique M. Rubio, Matías F. Soberon y Francisco Grande, contra los actos del C. administrador de rentas de esta Capital, que les cobra derechos municipales y del Estado, por la introduccion á esa plaza de los referidos tercios de mantas.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado

de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—CC. Presidente, José M. Iglesias.—M. M.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 14 de 1874.—Luis Mª Aguilar.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por Juana Moya contra el ciudadano Coronel del batallon núm. 15, por violacion de garantías.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito:

La ciudadana Juana Moya se queja de los procedimientos del C. coronel J. M. Rangel, al dar la Orden de su deportacion al puerto de Mazatlan, fundándose que con esta providencia se le violan las garantías que le otorga la Constitucion general en su artículo 16; y en consecuencia, para reparar ese agravio, pide amparo y proteccion, quedando en completa libertad. No hay duda, ciudadano juez, que la deportacion ó embarque de una persona contra su voluntad á otro lugar fuera de su residencia, es verdaderamente una pena y la que solo puede aplicar la autoridad judicial, previos los requisitos de la ley; y por lo mismo, un jefe

militar no es competente para imponer tal pena, y mucho menos cuando no ha habido formacion de causa; en consecuencia, con tales procedimientos se le violan á la quejosa una de las garantías personales y que está expresamente consignada en el artículo 16 de la Carta fundamental; por lo que el fiscal que suscribe, no puede menos para reparar tal agravio, que pedir se le ampare y proteja, estando apoyada esta solicitud en la fraccion I de la ley de 20 de Enero de 1869.

Guaymas, Octubre 3 de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia. Guaymas, Octubre 10 de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Octubre 14 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por Juana Moya, contra el C. coronel del 15º batallon de línea que guarnece este puerto, por violacion en la persona de la quejosa, de la garantía que le concede el artículo 16 de la Constitucion general, habiéndola igualmente impedido su viaje á Hermosillo por la diligencia, reteniéndola en prision y depósito con objeto de trasladarla al puerto de Mazatlan: visto el informe justificado del ejecutor del acto reclamado; el parecer del promotor fiscal de este juzgado, la citacion para sentencia y cuanto mas de autos consta.

Considerando: que si bien son de peso las razones expuestas por el C. coronel para justificar su procedimiento, pues pueden ser muy graves las consecuencias que ocasione con su mala conducta una muger como la Moya, no es sin embargo legal su procedimiento, pues no está facultado, ni ninguna autoridad, sea quien fuere, para decretar deportaciones sin forma alguna de juicio, ni procedimiento arreglado á las leyes: Que la Moya al disponer su viaje á la ciudad de Hermosillo estaba en su derecho, pues nin-

guna autoridad judicial ó administrativa se lo habia impedido, único caso en que no podría hacerlo segun lo dispone el art. 11 de la Constitucion general: Que el 16 de la misma, manda que á nadie se moleste en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde la causa legal del procedimiento. Que la prision y depósito de la Moya, que el C. coronel no ha contradicho, es una pena, y la aplicacion de ésta está reservada exclusivamente á la autoridad judicial, segun lo dispone el art. 21 de la Constitucion: por los legales fundamentos expuestos y apoyado en los artículos 101 y 102 de la Constitucion, este juzgado falla: 1º La justicia de la Nacion ampara y protege á Juana Moya, contra el procedimiento del C. coronel del 15º batallon de línea que guarnece este puerto, quien dispuso la suspensien del viaje de aquella á la ciudad de Hermosillo, su prision y deportacion al puerto de Mazatlan, por violar con tal procedimiento en la persona de la Moya, las garantías que le conceden los artículos 11, 16 y 21 de la Constitucion general: 2º Notifiquese, publíquese en el periódico oficial del Estado y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Fernando M. Astiazarán, juez de Distrito de Sonora, lo proveyó, firmándolo con los de asistencia ordinaria.—*Fernando M. Astiazarán.—A.—P. del Rincon.—A.—J. López.*

Es copia que certifico. Guaymas, Octubre 17 de 1874.—*Fernando M. Astiazarán.—A.—P. del Rincon.—A.—J. López.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 1º de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Sonora, por Juana Moya, contra el C. coronel del batallon núm. 15, que mandándola deportar al

puerto de Mazatlan, violaba en la persona de la quejosa las garantías otorgadas en el artículo 16 de la Constitución federal; visto el informe del coronel responsable, el parecer fiscal y la sentencia del juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se declara: que es de conformarse y se confirme por sus propios legales fundamentos, la sentencia del juez de Distrito que amparó á la quejosa. Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca. Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron:—*José M. Iglesias.*—*M. Arza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Oastañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 30 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por Dominga Casillas, contra el juez de primera instancia de Hermosillo, por violacion de garantías.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.—El fiscal dice: que en éste ocurso pide amparo y proteccion la joven Dominga Casillas, por la violacion que en su persona ha ejercido el Ciudadano Juez-1º de 1ª instancia de Hermosillo, al tenerla contra su voluntad en la

casa de Doña Gerónima Robles de Contreras, y en la que se le obliga á trabajar sin su pleno consentimiento.

Esta violacion flagrante que en nada la contradice la autoridad responsable, vulnera indudablemente á la quejosa, la garantía que le otorga la Constitución en su art. 5º, corroborándose la justicia que pueda tener la quejosa con los antecedentes que existen en este Juzgado sobre otro amparo de igual naturaleza que solicitó y obtuvo su hermana María Antonia; y por lo mismo no puede menos el que suscribe, que conformarse á lo que solicita, amparando y protegiendo á la joven Dominga Casillas, contra los procedimientos del Juez 1º de 1ª instancia de Hermosillo.

Guaymas, Setiembre 1º de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Setiembre 15 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por Dominga Casillas, contra el Juez 1º de 1ª instancia de Hermosillo, por haberla sacado de la casa de D. Juan B. Méndez donde sirva, y llevándola á la de Doña Gerónima Robles de Contreras; visto el escrito: el informe de la autoridad ejecutora: el pedimento fiscal: la citacion para sentencia, y cuanto mas consta y tener presente convino.

Considerando, primero: ser constante en autos, estar Dominga al servicio de la Sra. de Contreras, segun consta del escrito que con fecha 26 de Julio pasado dirigió ésta al Juez 1º de 1ª instancia de Hermosillo; segundo: que este servicio es forzado, pues no es voluntad de la Casillas permanecer en la casa de dicha Señora; tercero: que siendo aquella menor de edad, no seria conveniente de ninguna manera dejarla en absoluta libertad, expuesta á los peligros consiguientes á una joven de esa edad; cuarto: que la Casillas tiene voluntad en permanecer en la casa de Doña Juana B. Méndez, cuya familia por su honradez presta bastan-